



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho de febrero de dos mil veintitrés

**E22-114**

**PROCESO.**

**EJECUTIVO CONEXO**

**EJECUTANTE :**

**JAIRO ALBERTO RENDÓN**

**EJECUTADO:**

**COLPENSIONES**

**RADICADO:**

**05001-31-05-011-2015-01771-02.**

**-DECISIÓN:**

**CONFIRMA AUTO**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar solicitada.

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a MAURICIO LARA GARCIA identificado con C.C. No. 1128442661 de Medellín y portador de la T.P. No. 273006 del C.S de la J. para representar los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES, identificado con c.c. 79.576.294 y TP. 103.505 del C.S. de la J. representante legal de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que acompaña, en su calidad de apoderado judicial de la COLPENSIONES-, de acuerdo con la escritura pública N° 3377 de 2 de septiembre de 2019 de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 03** de discusión, que se adopta en los siguientes términos:

## 1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

### 1.1. LO PRETENDIDO

- El Juzgado Segundo Adjunto al Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 31 de agosto de 2010, CONDENÓ al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES a reliquidar la pensión de vejez del señor JAIRO ALBERTO RENDÓN a partir del 12 de octubre de 2003, cuyo retroactivo al mes de agosto de 2010 asciende a la suma de \$4.176.057. Y a partir del mes de septiembre de 2010 a continuar reconociendo una mesada pensional en cuantía de \$902.106. Así mismo condenó a la indexación de las sumas reconocidas por reajuste y las costas del proceso.
- La anterior decisión fue confirmada por la Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 19 de noviembre de 2012. Oportunidad en la que se condenó en costas al ISS, fijando las agencias en derecho en la suma de \$775.503.
- El 6 de noviembre de 2015 la parte demandante solicitó se librara mandamiento en contra de COLPENSIONES por la suma de \$4.176.057 correspondiente a la diferencia de las mesada pensionales causadas desde el 12 de octubre de 2003 hasta el 31 de agosto de 2010, por la indexación de la anterior suma desde el 12 de octubre de 2003 y hasta la fecha de pago efectiva, por \$1.030.000 por las costas de primera instancia más los intereses legales desde el 9 de agosto de 2013 y hasta el pago, por \$775.503 por las costas de segunda instancia más los intereses legales liquidados desde el 24 de febrero de 2013 y hasta el pago de la obligación y por las costas del ejecutivo.
- Por auto del 25 de febrero del 2016 el a quo libró mandamiento de pago en contra de COLPENSIONES por la suma de \$4.176.057 como capital, correspondiente al reajuste reconocido en el proceso ordinario, \$1.805.503 por las costas procesales del proceso ordinario de primera y segunda instancia, la indexación de las anteriores sumas a partir de noviembre de 2003 y hasta el pago efectivo y las costas del ejecutivo.
- Por auto del 15 de mayo de 2018 se corrigió el mandamiento de pago, en el sentido de que la suma adeudada como capital del reajuste de la pensión asciende a \$4.969.616 correspondiente al retroactivo pensional causado entre el 12 de octubre de 2003 y el 31 de agosto de 2010 y que además se adeuda la suma de \$6.579.979 como capital correspondiente a la diferencia del retroactivo pensional desde el 1º de septiembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2018.
- El 26 de noviembre de 2019 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PAGO, ordenando la entrega del título judicial por valor de \$1.805.503 por las costas del ordinario y ordenó seguir adelante la ejecución por \$4.969.616 correspondiente al retroactivo pensional causado entre el 12 de octubre de 2003 y el 31 de agosto de 2010 y \$6.579.979 como capital correspondiente a la diferencia del retroactivo

pensional desde el 1° de septiembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2018, más la indexación de las sumas anteriores y las costas del ejecutivo.

- Después de haberse surtido las etapas de liquidación y aprobación del crédito, mediante auto del 7 de abril de 2022 el a quo negó la medida cautelar solicitada por la parte actora. Decisión que fue apelada por la apoderada del ejecutante.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ**

Señaló el a quo que no era procedente decretar la medida cautelar de embargo de los dineros que reposan en la cuenta de ahorros n.º 65283206810 de Bancolombia, cuyo titular es COLPENSIONES, pues según respuesta a oficio de decretado por el despacho, las cuentas que posee la entidad ejecutada en Bancolombia son de carácter inembargable, en tanto administran recursos del sistema general de seguridad social en pensiones.

### **2.2. ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD DEL EJECUTANTE**

La recurrente afirmó que el despacho no tuvo en cuenta el sustento legal y jurisprudencial expuesto en la solicitud de medida cautelar y en el pronunciamiento que se hizo frente a la respuesta dada por BANCOLOMBIA, de donde se desprende que en dicha respuesta no se sabe sobre cual cuenta se decretaría el embargo, sino que se hace de forma general, por lo que para el despacho proceder a decretar la medida cautelar solicitada no requiere que COLPENSIONES, BANCOLOMBIA o el MINISTERIO DE HACIENDA certifique que si la cuenta No. 65283206810 tiene el carácter de inembargable, ya que en las respuestas suministradas por las entidades, como se observan en los oficios incorporados al proceso, lo hacen de forma genérica, cuando certifican que todas las cuentas de ahorro y/o corriente que tiene Colpensiones en Bancolombia tienen el carácter de inembargables, sin especificar el número de la cuenta.

Agregó que en el presente proceso se solicitó el embargo de la cuenta No. 65283206810 porque esta no tiene el carácter de inembargable, como se observa en el proceso que actualmente cursa en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín con el radicado 2018-00500, donde se decretó el embargo sobre la misma.

Señaló que conforme el artículo 48 de la Constitución Nacional la seguridad social es un derecho fundamental y como tal debe garantizarse a todos los habitantes y a su vez el artículo 228 de la misma Carta prevé que el libre acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, en este contexto las decisiones de los jueces resultan de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios.

Insistió que si bien de conformidad con el artículo 594 del C.G.P. son inembargables, los recursos del Sistema de Seguridad Social, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nacional, los recursos del Sistema General de Participaciones y los recursos del Sistema General de Regalías, según el Decreto 4121 de 2011 COLPENSIONES es una Empresa Industrial y Comercial del Estado y conforme al Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, estas no integran el Presupuesto Nacional.

De otro lado indicó que si bien el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 dispone que son inembargables los recursos del régimen de prima media, las Altas Cortes han desarrollado una línea consolidada y pacífica en torno a las excepciones al principio de inembargabilidad, que se materializa cuando se advierte vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores y pensionados, al mínimo vital, dignidad humana, seguridad social y libre acceso a la administración de justicia, como se estudió en sentencias C-546 de 1994, T-025 de 1995, C-354 de 1997, C-566 de 2003, C-104 de 2005, entre otras.

## **2.1. ALEGATOS DE COLPENSIONES**

Manifestó que debe confirmarse el auto que negó el embargo de la cuenta bancaria No. 65283206810 toda vez que dicha cuenta bancaria está destinada a cubrir el aseguramiento en vejez del régimen de prima media con prestación definida, y por lo tanto sus recursos son inembargables según lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 594 del Código General del Proceso.

Indicó que en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Medellín en diferentes providencias como la del 2 de septiembre de 2019, emitida por la magistrada MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, dentro del proceso ejecutivo con radicado 2019-00058, la del 04 de febrero de 2021 con ponencia de la magistrada MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, en proceso con radicado 015-2017-00363-00 y recientemente el 27 de mayo de 2022 la magistrada MARÍA PATRICIA YEPES GARCIA, dentro del proceso ejecutivo con radicado 2019-00098, donde se refirió específicamente a la misma cuenta bancaria con No. 65283206810.

Agregó que frente a la regla general de inembargabilidad, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las Sentencias STL18606 del 14 de diciembre de 2016 Radicación 41347 y 31274 del 28 y 30 de enero de 2013, respectivamente, ha señalado la imposibilidad de aplicar medidas cautelares a bienes inembargables, aduciendo que esto no es absoluto y que puede haber una excepción frente a situaciones de personas de la tercera edad, que no cuentan con seguridad social, ni con recursos económicos para mantenerse, lo que no ocurre en el presente caso, donde el ejecutante es actualmente beneficiario de una pensión de vejez y lo que se pretende es el pago de diferencias entre lo pagado y las mesadas causadas.

### **3. CASO EN CONCRETO**

Sea lo primero señalar que la Sala considera que en principio son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, conforme el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que reza:

“Inembargabilidad: Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman

“No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetaran en su integridad los derechos reconocidos a terceros con estas sentencias”

Esta situación fue morigerada por la sentencia C-354 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, cuando dijo:

“Es exequible el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que incorporó materialmente el artículo 6ª de la Ley 179 de 1994, bajo el entendido que los créditos a cargo del estado, bien sea que consten en sentencia o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto – en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esa clase de títulos – y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”

Por tanto es perfectamente viable -cumplidas las exigencias de la jurisprudencia transcrita- embargar alguna cuenta bancaria o similar de una entidad pública que contenga dineros públicos para efectos de hacer efectivos los derechos de los pensionados.

Ahora bien no queda duda que la norma anterior debe concordarse con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, norma especial, que a la letra dice:

“Inembargabilidad. Son inembargables:

1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente ley.
7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.

PAR. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros sólo gozarán de los mismos beneficios que la ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad.”

Y con el artículo 594 del Código General del Proceso que reza:

**ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES.** Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

**PARÁGRAFO.** Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (...)” (negritas y subrayas fuera de texto)

Lo anterior indica a la Sala que los recursos de la seguridad social tienen protección especial, buscándose con ello que los dineros destinados al pago de las mesadas pensionales no sean menguados, impidiendo su pago a través de mecanismos como el embargo de cuentas destinadas para estos efectos. En otras palabras, debe ceder el interés particular al interés general, haciendo efectivo el principio de solidaridad, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, debiéndose acreditar al interior del proceso que la cuenta que se pretende embargar está destinada a estos pagos.

Debe recordarse que la regla relacionada con la imposibilidad de decretar medidas cautelares no es absoluta, máxime cuando un ejecutante pretende, *verbi gratia*, el pago de una mesada pensional cuya omisión genera una evidente violación al derecho fundamental al mínimo vital al ser un sujeto de especial protección constitucional en virtud de la edad.

Al respecto esta Sala ha acogido la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de tutela con radicado 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre, 41239 de 12 de diciembre de 2012, 31274 de 28 de enero de 2013, 41347 de 30 de enero

de 2013, 45470 del 14 de diciembre de 2016 y 72301 del 19 de abril de 2017, en las cuales ha excepcionado la regla general de inembargabilidad cuando “...se encuentran en riesgo el derecho a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y a la tercera edad, esto siempre que sea imposible la satisfacción pensional a través de otra medida...”.

En el caso de autos, conforme al auto del 25 de febrero del 2016 que libró mandamiento de pago y el 15 de mayo de 2018 que lo corrigió, el mismo se libró en contra de COLPENSIONES por la suma \$4.969.616 correspondiente al retroactivo pensional del reajuste causado entre el 12 de octubre de 2003 y el 31 de agosto de 2010 y que además se adeuda la suma de \$6.579.979 como capital correspondiente a la diferencia del retroactivo pensional desde el 1º de septiembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2018, \$1.805.503 por las costas procesales del proceso ordinario de primera y segunda instancia, la indexación de las anteriores sumas a partir de noviembre de 2003 y hasta el pago efectivo y las costas del ejecutivo

Lo anterior, significa que estamos ante un supuesto muy diferente al indicado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, puesto que no se considera que, con su retardo en el pago, por regla general, se afecte el mínimo vital del ejecutante, ya que este al contar con una pensión de vejez ya reconocida, tiene cubierto en principio su mínimo vital.

Aunado a lo anterior, según respuesta a oficio allegada BANCOLOMBIA que reposa en archivo 21, se observa que la entidad certificó que los dineros depositados por COLPENSIONES en las cuentas bancarias que posee en la entidad, hacen parte del Sistema General de Pensiones del Régimen de Prima Media y por tanto son de naturaleza inembargable.

En éste orden de ideas, considera la Sala que en el caso de autos se debe **CONFIRMAR** la decisión adoptada en primer grado que **NEGÓ** la medida de embargo, pues el ejecutante no se encuentra inmerso dentro de los parámetros que han establecido nuestras Altas Cortes para que se acceda a embargar determinadas cuentas propiedad de la ejecutada, incluso no se evidencia la afectación a derechos que ostenten el carácter de fundamentales.

Costas en esta instancia a cargo del ejecutante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## DECIDE

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto proferido el 7 de abril de 2022 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo promovido por **JAIRO ALBERTO RENDÓN** contra **COLPENSIONES**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notifica por **ESTADOS**.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS No. 021 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 9 DE FEBRERO DE 2023

Secretario